

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

APELACIÓN – AUTO	
DEMANDANTE	CARLOS ENRIQUE RODRÍGUEZ CORTÉS
DEMANDADO	COLPENSIONES- AFP PORVENIR
RADICADO	05001-31-05-015-2022-00224-02
TEMAS	GRADUACIÓN DE LAS COSTAS
DECISIÓN	MODIFICA VALOR FIJADO

Medellín, veintisiete (27) de julio de dos mil veintitrés (2023)

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los magistrados ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA, MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA, y como ponente MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO, en acatamiento de lo previsto por el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020, y surtido el traslado correspondiente, procede a proferir decisión de segunda instancia dentro del presente proceso, promovido por el señor **CARLOS ENRIQUE RODRÍGUEZ CORTÉS** contra **COLPENSIONES** y la **AFP PORVENIR S.A.**

La Magistrada Sustanciadora, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO**, declaró abierto el acto y a continuación, después de deliberar sobre el asunto, de lo que se dejó constancia en el **ACTA No 031**, se procedió a decidirlo en los siguientes términos:

ANTECEDENTES

Es materia de la Litis, decidir el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandante, contra el auto proferido por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín, el día 01 de junio de 2023, el cual impartió aprobación a la liquidación secretarial de costas procesales impuestas en la respectiva instancia.

Al respecto, debe recordarse que el señor CARLOS ENRIQUE RODRÍGUEZ CORTÉS solicitó que se declarara la ineficacia de la afiliación al régimen de ahorro individual con solidaridad adelantado por la administradora del régimen privado, y que, en consecuencia, se ordene a la AFP trasladar a COLPENSIONES las sumas cotizadas por el actor, debiendo ordenar a esta última entidad recibir dichas sumas, aceptar al demandante en el régimen de prima media con prestación definida, actualizando su historia laboral.

La A Quo en audiencia pública de juzgamiento, celebrada el **10 de febrero de 2023**, dispuso lo siguiente:

PRIMERO: DECLARAR la ineficacia del traslado del señor CARLOS ENRIQUE RODRÍGUEZ CORTÉS, identificado con la cedula de ciudadanía 3.055.131, del régimen de prima media al régimen de ahorro individual con solidaridad en la AFP PORVENIR S.A., representada legalmente por Miguel Largacha Martínez, o quien haga sus veces.

SEGUNDO: CONDENAR a PORVENIR S.A., a trasladar a COLPENSIONES, representada legalmente por Jaime Dussan Calderon, o quien haga sus veces, dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de ésta providencia, las sumas que se encuentren en la cuenta de ahorro individual del señor CARLOS ENRIQUE RODRÍGUEZ CORTÉS, esto es, las respectivas cotizaciones más los rendimientos, sin incluir otros conceptos que no fueron solicitados en la demanda.

TERCERO: CONDENAR a COLPENSIONES a recibir las sumas de dinero señaladas en el numeral segundo, que le sean trasladadas por PORVENIR S.A.

CUARTO: ABSOLVER a COLPENSIONES del reconocimiento y pago de la pensión de vejez y los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, según lo indicado en precedencia, aclarando que una vez se acrediten los requisitos exigidos para acceder a la mentada prestación económica, el afiliado podrá elevar la correspondiente solicitud ante COLPENSIONES.

QUINTO: DECLARAR no probada la excepción de prescripción conforme lo indicado en la parte considerativa de esta sentencia y las demás formuladas por las codemandadas quedan implícitamente resueltas con lo determinado.

SEXTO: En el evento de que esta decisión no sea APELADA por COLPENSIONES se ordena el envío del proceso al Honorable Tribunal Superior de Medellín Sala Laboral, para que surta el grado jurisdiccional de CONSULTA, artículo 69 del C.P.T. y de la S.S. modificado por el artículo 14 Ley 1149 de 2007.

*SÉPTIMO: Las costas serán asumidas exclusivamente por PORVENIR S.A., para lo cual se fija las agencias en derecho a favor del demandante, en la **suma de \$1'160.000, que equivale a un salario mínimo legal mensual vigente para el año 2023.***

La sentencia de primera instancia fue conocida por este Tribunal de Distrito Judicial, por la apelación interpuesta por COLPENSIONES y a su vez se conoció en grado jurisdiccional de consulta a favor de la entidad administradora de pensiones COLPENSIONES, habiéndose proferido sentencia de segunda instancia el día 29 de marzo de 2023, mediante la cual se ordenó:

“PRIMERO: ADICIONAR el numeral segundo de la parte resolutive de la sentencia de primera instancia, a efectos de ORDENAR que la AFP PORVENIR S.A., traslade a

COLPENSIONES, las cuotas de administración, las primas previsionales y los porcentajes del fondo de garantía de pensión mínima. ADICIONAR ese mismo numeral a fin de ORDENAR que la AFP PORVENIR S.A, traslade a COLPENSIONES, dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, los recursos ordenados, incluyendo la indexación de las cuotas de administración, primas previsionales y porcentajes del fondo de garantía de pensión mínima y remitir a COLPENSIONES, al momento de cumplirse la orden impartida, la relación discriminada de los conceptos, con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de la presente sentencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR dicha sentencia en todo lo demás, según lo expuesto en precedencia.

*TERCERO: **ABSTENERSE de imponer costas procesales de segunda instancia, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de la presente sentencia***”.

DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA OBJETO DE ALZADA

Una vez surtido el recurso de apelación y consulta, fue devuelto el expediente al juzgado de origen, y la A Quo mediante auto del 01 de junio de 2023, ordenó que, a través de trámite secretarial, se liquidaran las costas procesales, por las siguientes sumas (PDF 21):

- **Agencias en derecho primera instancia** a cargo de la AFP PORVENIR y en favor del demandante **\$1.160.000.**
- Sin costas por la segunda instancia.

En providencia de la misma fecha, se le impartió aprobación a dicha liquidación por parte de la A Quo.

El apoderado judicial de la parte demandante, recurrió mediante recurso de **reposición y apelación** el valor liquidado por concepto de agencias en derecho, argumentando que las mismas debieron fijarse en una suma superior, debido a la gestión realizada en el trámite del proceso, pues se asistió a todas las audiencias practicadas y se realizaron todas las actuaciones de parte que fueron necesarias y requeridas, además de que las pretensiones principales de la demanda salieron prósperas, por lo cual, en una sana y equitativa interpretación de lo señalado por las normas que regulan la fijación de las agencias en derecho en primera instancia, estas debieron ser de tres salarios mínimos legales mensuales, y no como las estimó el despacho en \$1.160.000. (PDF 22)

En auto del 06 de junio de 2023, visible en el PDF 23, la juez de la primera instancia, al resolver el recurso de reposición y subsidio de apelación, adujo que

no le asiste razón al apoderado judicial de la parte actora, para aumentar el valor de las agencias en derecho, pues el Despacho al momento de hacer la tasación respectiva, se sujetó a los criterios dispuestos por el Acuerdo PSAA16-10554 de 2016, de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, y que además, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 228 de la Constitución, que determina el principio de la autonomía y la imparcialidad de la justicia, no se obliga al operador jurídico, a imponer el máximo o el mínimo con respecto a las agencias en derecho.

Alegatos de conclusión

En la oportunidad de ley, el apoderado judicial de PORVENIR presentó alegatos de conclusión, a través del cual argumentó que, si bien la primera instancia, señaló las agencias en derecho en la suma de \$1.160.000, es claro que el monto tuvo en consideración la naturaleza y calidad del proceso, así como la gestión del apoderado de la parte demandante, como quiera que, la condena en contra de la AFP, obedece, a que los Tribunales acogen la interpretación que ha hecho la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, respecto a la validez del acto jurídico del traslado, el cual se circunscribe a que, los fondos privados acrediten que suministraron la información en los términos y con el alcance que ha indicado la referida Alta Corporación, exigencia que resulta un imposible, pues se impusieron cargas probatorias que no existían para el momento en que ocurrió el hecho de la vinculación del afiliado. Al respecto destacó que, el H. Tribunal de Montería, en un proceso de ineficacia del traslado, acerca de la complejidad del asunto tramitado, en la sentencia del trece (13) de agosto del año dos mil veintiuno (2021), Expediente 23-001-31-05-005-2020-00112-01, dijo: *"se fijarán tales agencias en 1 SMMLV que, según artículo 5° del Acuerdo PSAA16-10554 de 2016 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, corresponde al tope mínimo para la segunda instancia en procesos declarativos en general; y, se acude a ese extremo mínimo, porque lo discutido no fue de complejidad."*

Con fundamento en lo anterior, pidió que se confirme la decisión de primera instancia, pues la gestión realizada por el apoderado de la parte actora, se limitó argumentar en el escrito de demanda que el accionante no se le suministró la información, sin requerir esfuerzo probatorio para acreditar tal hecho, ya que, en el alcance que ha expuesto la jurisprudencia, al tratarse de una

negación indefinida, la carga probatoria corre por cuenta de los fondos privados, luego claramente, este caso, no ofreció complejidad para la parte actora.

Teniendo en cuenta la anterior crónica procesal, se pasa a resolver de fondo, previas las siguientes

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Conforme a lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 365 del Código General del Proceso, las costas de un proceso corren a cargo de *“...la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto...”*.

Dicha disposición consagra un criterio objetivo que busca que las costas del proceso sean cubiertas por quien pierde el litigio, sin hacer distinción sobre la persona que debe correr con la obligación una vez se decida la litis.

Las costas del proceso comprenden, de un lado, los gastos judiciales que haya hecho la parte beneficiada con la condena y que aparezcan comprobados en el expediente y del otro, las agencias en derecho, en las que, para su fijación por el juez *“deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o éste y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas...”* (Artículo 366, numeral 4º del CGP).

De otro lado, el Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, emanado de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, establece en su artículo 2º los criterios a tener en cuenta para la fijación de tales emolumentos:

“ARTÍCULO 2º. Criterios. Para la fijación de agencias en derecho el funcionario judicial tendrá en cuenta, dentro del rango de las tarifas mínimas y máximas establecidas por este acuerdo, la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y demás circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha

actividad, que permitan valorar la labor jurídica desarrollada, sin que en ningún caso se puedan desconocer los referidos límites.

PARÁGRAFO. *Cuando el asunto objeto del proceso esté relacionado con la violencia de género y dentro de él se hayan acreditado las circunstancias constitutivas de la misma, el funcionario judicial al fijar agencias en derecho deberá realizar una valoración favorable de cargas y costos para las mujeres víctimas de aquella.”*

Seguidamente, en lo que atañe a la tasación de las agencias en aquellos en los PROCESOS DECLARATIVOS EN GENERAL, el mencionado acuerdo prescribe:

“ARTÍCULO 5º. *Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son:*

1. PROCESOS DECLARATIVOS EN GENERAL.

En única instancia.

a. Cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario, entre el 5% y el 15% de lo pedido.

b. En aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de pretensiones pecuniarias, entre 1 y 8 S.M.M.L.V.

En primera instancia.

a. Por la cuantía. Cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario:

(i) De menor cuantía, entre el 4% y el 10% de lo pedido.

(ii) De mayor cuantía, entre el 3% y el 7.5% de lo pedido.

b. Por la naturaleza del asunto. En aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de pretensiones pecuniarias, entre 1 y 10 S.M.M.L.V.

En segunda instancia.

Entre 1 y 6 S.M.M.L.V.”

CASO CONCRETO

Vigencia de las normas reguladoras de la tasación de agencias en derecho en el Sub lite:

En el presente caso resulta aplicable la regulación establecida en el Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto 2016 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, teniendo en cuenta que nos encontramos frente a una demanda presentada el **13 de mayo de 2022** (PDF N° 01 del expediente digital).

También destaca la Sala que, al tratarse de un proceso ordinario laboral declarativo de doble instancia, y resultar la sentencia de primera instancia favorable a los intereses del demandante y desfavorable para los intereses de la AFP PORVENIR S.A., el numeral 1° del artículo 5° del Acuerdo PSAA16-10554 de 2016, establece con absoluta claridad que las agencias en derecho en primera instancia tratándose de asuntos sin cuantía o de prestaciones pecuniarias, podrán ser tasadas por el administrador de justicia en una suma que puede oscilar entre uno (1) y diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV).

Pues bien, el juez de la primera instancia en el auto del 01 de junio de 2023, liquidó las costas procesales, señalando como AGENCIAS EN DERECHO en primer grado, en cuantía de \$1.160.000, a cargo de la AFP PORVENIR y a favor de la parte demandante.

Sin embargo, esta Sala considera que la fijación de las agencias en derecho en lo que respecta a la primera instancia, no está acorde a los criterios establecidos en el art. 2° del Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, relativos a la naturaleza, la calidad y la duración del proceso y demás circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha actividad, que permitan valorar la labor jurídica desarrollada, sin que en ningún caso se puedan desconocer los referidos límites.

Y es que, si bien es cierto el asunto puesto a consideración de los estrados judiciales, no revestía ninguna complejidad jurídica y probatoria, por el contrario, la problemática de la nulidad y/o ineficacia del acto jurídico de traslado entre regímenes pensionales por falta de consentimiento informado del afiliado, es una postura ya pacífica en nuestra jurisprudencia nacional, está sola circunstancia no podía ser la causa, para tasar agencias en derecho en primera instancia en suma equivalente a 1 SMLMV para el año 2023.

Lo anterior, por cuanto este proceso judicial también debió surtir las mismas instancias previstas en el procedimiento laboral, y satisfacer en igual medida, las exigencias formales y todo el rigor procesal de otro tipo de procesos de naturaleza más compleja.

El apoderado judicial de la demandante, debió estar atento a todo el transcurso del proceso, asistir a las audiencias, y preparar los recursos y alegaciones que hicieren falta para la resolución oportuna y sin dilaciones de la litis, y toda esa gestión no se ve recompensada, cuando las agencias en derecho se tasan en casi el mínimo de la tarifa permitida por el Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016.

En ese orden de ideas, estima la Sala, que dada la naturaleza y complejidad del proceso, que en este caso es un asunto de ineficacia, que tiene una línea jurisprudencial trazada y definida por la CSJ, atendiendo a las excepciones formuladas, y la duración del proceso que se extendió desde 13 de mayo de 2022 (fecha de presentación de la demanda), hasta el 10 de febrero de 2023 (época en la que se profirió la sentencia de primera instancia), se concluye que, resulta procedente modificar las agencias en derecho, a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2023, época en que se profirió la sentencia de primera instancia, esto es, DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS (\$2.320.000); accediéndose así al aumento solicitado por la parte apelante, respecto a las agencias en derecho de primera instancia.

Sin necesidad de mayores apreciaciones sobre el caso, se MODIFICARÁ el valor liquidado por concepto de agencias en derecho de primera instancia.

Sin COSTAS en esta instancia.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL,**

RESUELVE:

Primero. MODIFICAR la providencia objeto de apelación, de origen y fecha conocidos, en el sentido de aumentar el valor de agencias en derecho en

primera instancia a cargo de la **AFP PORVENIR S.A.** y en favor del demandante **CARLOS ENRIQUE RODRÍGUEZ CORTÉS**, las cuales quedarán en dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2023, en que se profirió la sentencia de primera instancia, esto es, DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS (\$2.320.000), por lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

Segundo. Sin Costas en esta instancia.

Tercero: Se ordena notificar por **ESTADOS** lo resuelto, y devolver el expediente al juzgado de origen.

Los magistrados



MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA



MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA LABORAL -
HACE CONSTAR

Que la presente providencia se notificó por
estados N ° 129 del 28 de Julio de 2023.

Consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>.